

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021).

Auto interlocutorio No. _

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

PROCESO:	Ejecutivo
EXPEDIENTE:	76001-33-33-015-2019-00225-01.
EJECUTANTE:	Celia María López Rengifo www.giraldoabogados.com
EJECUTADO:	Municipio de Santiago de Cali
ASUNTO:	Auto que revoca providencia que negó mandamiento de pago.

I. OBJETO DE LA DECISION

La Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, contra el auto interlocutorio No. 573 de septiembre 16 de 2019, proferido por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali, que se abstuvo de librar mandamiento de pago.

II. ANTECEDENTES

La señora Celia María López Rengifo, a través de apoderado judicial, presentó proceso ejecutivo contra el Municipio de Santiago de Cali y pidió librar mandamiento de pago a su favor, por el pago del capital correspondiente a la prima de servicios de los años 2009 a 2013, por los intereses DTF, por los intereses corrientes y moratorios, y por las costas del proceso ordinario.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 573 de septiembre 16 de 2019¹ el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, negó el mandamiento de pago.

Consideró que, que en el presente asunto la acción ejecutiva es improcedente por estar el título viciado de ilegalidad, bajo el criterio que, si bien las sentencias ejecutoriadas son inmutables e inimpugnables, no es menos cierto que esa obligatoriedad no es absoluta, sino relativa, pues si se pide dar cumplimiento a un fallo que es absolutamente contrario a derecho, bien puede el juez abstenerse de hacerlo efectivo.

Así entonces, indicó que en un proceso ejecutivo que se adelantó en su despacho el cual no recrea una situación igual a la aquí planteada pero que puede ser aplicada por analogía, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, trajo a colación la sentencia T-546 de 2014 que precisó:

“...la Sala considera que las interpretaciones de los jueces administrativos vulneran el derecho al debido proceso de la UGPP, porque desconoce la jurisprudencia de esta

¹ Ver folios 67 a 70.

RADICACIÓN: 2019-00225-01
PROCESO: Ejecutivo
EJECUTANTE: María López Rengifo
EJECUTADO: Municipio de Santiago de Cali



2

corporación señalada en el fallo T-359 de 2009, en el cual la Corte estableció de manera clara que con anterioridad a la Ley 100 de 1993, los pensionados con pensión gracia que contribuyan con el 5% de su mesada pensional para la financiación de los servicios de salud, pasaron a cotizar el 12% sin importar el tipo de pensión de que se trate, concluyendo que sin excepción alguna, es obligatoria la cotización a salud sobre la mesada pensional en un porcentaje del 12% aporte que con posterioridad se destina a financiar el servicio médico asistencial del afiliado o pensionado”

Por otro lado, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto de marzo 14 de 2019², con base en la providencia antes citada señaló:

“...Encuentra la Sala, que efectivamente existe un precedente jurisprudencial planteado por el máximo órgano constitucional en el que aborda los casos como el presente en sede de revisión de tutela, contra sentencia judicial proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, e indica que no es posible desconocer lo dispuesto para el efecto como quiera que el operador judicial no se encuentra obligado a cumplir con una sentencia que a todas luces es ilegal.

(...)

Es menester señalar que corresponde al Juez administrativo no sólo velar por la efectiva garantía de los derechos deprecados por los sujetos que de una u otra manera los consideren vulnerados como consecuencia de un hecho, omisión y operación a cargo de la administración, sino también ser garante del tesoro público y determinar que el mismo sea intervenido de una forma justa y necesaria en la que no se conlleve al detrimento infundado a cargo del Estado”.

Por lo anterior, en el caso concreto se abstuvo de librar mandamiento de pago, toda vez que, si bien en la sentencia ordinaria de segunda instancia se ordenó al Municipio de Cali a título de restablecimiento del derecho reconocer, liquidar y pagar a la ejecutante la prima de servicios, no podía desconocerse -según el juez- el hecho de que el Consejo de Estado mediante providencia de abril 14 de 2016 unificó su jurisprudencia con respecto a la prima de servicios de docentes, negándola a los docentes nacionales vinculados antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

Consecuentemente, al considerar evidente que la ejecutante no tenía derecho a dicha prima consideró que, pese al principio de la cosa juzgada, no era procedente desacatar la decisión del Consejo de Estado, cuando el título deviene de una errada interpretación de una norma que la torna ilegal y por ende consideró que no era obligatorio hacer cumplir una decisión a todas luces era contraria a derecho.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostuvo el apelante³ en síntesis que, en el presente caso el título ejecutivo está constituido por una providencia judicial en firme, esto es una decisión de segunda instancia proferida en proceso ordinario por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo tanto, considera que no existe duda de la existencia del título ejecutivo de

² Providencia del 14 de marzo de 2019, magistrado ponente: Oscar Alonso Valero Nisimblat, Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, proceso ejecutivo de Aura María Morales de Ramírez frente a la UGPP.

³ Ver folios 72 a 76.

RADICACIÓN: 2019-00225-01
PROCESO: Ejecutivo
EJECUTANTE: María López Rengifo
EJECUTADO: Municipio de Santiago de Cali



3

conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 297 del CPACA y que su competencia corresponde a la jurisdicción administrativa.

Ahora bien, pese a lo anterior sostiene que el juez *a quo* se aparta de la orden del superior absteniéndose de librar mandamiento ejecutivo bajo el argumento de “...*estar el título viciado de ilegalidad...*”, actitud que adopta de manera oficiosa y sin facultad para ello, lo cual no es de recibo habida cuenta que de esta manera se vulneran principios propios de la administración de justicia como el acceso a la misma y el respeto por los derechos, al atomizarse una sentencia que reconoce derechos en favor de la ejecutante incursionando en tipos de otra área del derecho, imponiendo con sus propias razones transgresoras del principio a la seguridad jurídica, y los principios de juridicidad que deben imperar en el ejercicio jurisdiccional.

Así mismo, explicó que para la edificación de la providencia que impugna, se tuvo como fundamento un aparte de una sentencia de tutela, la cual, analizó un asunto completamente diferente, lo cual impide que pueda ser tenida en cuenta como un eventual antecedente jurisprudencial, agregando a ello, que los efectos de una acción de tutela son *inter partes*, además de no existir la mínima coincidencia entre lo analizado en el trámite constitucional y lo pedido en el presente asunto.

Finalmente, la obligatoriedad de acoger una sentencia de unificación de jurisprudencia, en el caso concreto resulta intemporal, pues, la providencia de segunda instancia que sirve de título ejecutivo proferida por esta Corporación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la demandante contra el Municipio de Santiago de Cali en la cual se le reconoció la prima de servicios como factor salarial, fue expedida en fecha anterior a la sentencia que unificó jurisprudencia frente a tal asunto.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer si el juez ESTÁ facultado para negar el mandamiento de pago, bajo el argumento que la decisión judicial que se pretende ejecutar es ilegal por haber acaecido un cambio en el precedente jurisprudencial.

5.2. TESIS

Teniendo en cuenta la finalidad del proceso ejecutivo, el juez debe limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para la procedencia del mandamiento de pago y, por lo tanto, no está facultado para efectuar un nuevo examen de legalidad de la providencia objeto de ejecución, en aras de garantizar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. En consecuencia, la Sala revocará la providencia impugnada.



5.3. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso (CGP) y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA en este escrito)⁴ establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP⁵ preceptúa que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Con respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que:

“Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. *Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al*

⁴ **Artículo 297. Título Ejecutivo.** Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

⁵ **Artículo 422. Título ejecutivo.** Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

RADICACIÓN: 2019-00225-01
PROCESO: Ejecutivo
EJECUTANTE: María López Rengifo
EJECUTADO: Municipio de Santiago de Cali



5

demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal. (...)

La misma norma dispone a continuación que *“los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso.”*

En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o auto que ordene seguir adelante con la ejecución, según sea el caso.

El Consejo de Estado sostuvo que los títulos ejecutivos deben cumplir con ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales: i) Las formales, se refieren a las que den fe de que los documentos que lo conforman sean auténticos y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado o de una providencia judicial que preste mérito ejecutivo. ii) Las sustanciales, hacen alusión a que las obligaciones sean claras, expresas y exigibles. Igualmente ha señalado que un título ejecutivo puede ser singular, cuando está constituido en un solo documento, o complejo, cuando esté integrado por un conjunto de documentos⁶.

Dicha Corporación, también señaló que una obligación es clara, cuando no surge duda del contenido y características de la misma; expresa, cuando consigna taxativamente la existencia del compromiso, y exigible, cuando para pedir el cumplimiento no es necesario agotar plazos o condiciones, o los mismos ya se han agotado⁷.

Adicionalmente, la misma colegiatura expuso que la finalidad del proceso ejecutivo es garantizar el ejercicio libre y eficaz de los derechos respecto de los cuales no hay duda de que le pertenecen a una persona; es una herramienta que brinda el ordenamiento jurídico para hacer efectivo el derecho material o sustancial del que se es titular. Por tanto, su propósito no es procurar el reconocimiento del derecho o interés protegido, el cual ha debido ventilarse en el proceso correspondiente, sino su satisfacción a través de la vía coactiva. En este punto, resulta pertinente traer a colación el siguiente extracto jurisprudencial:

“En primer lugar, la Sala advierte que el proceso ejecutivo es un instituto jurídico procesal idóneo para garantizar el ejercicio libre y eficaz de los derechos respecto de los cuales no hay duda que le pertenecen a una persona, incluso mediante el uso de la facultad coercitiva de la rama jurisdiccional del poder público.

En otras palabras, el proceso ejecutivo es una herramienta por medio de la cual el ordenamiento jurídico le brinda a los asociados la posibilidad de hacer efectivo el

⁶ C. de E. Sección Tercera, auto de enero 31 de 2008, CP. Dra. Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 44401-23-31-000-2007-00067-01 (34201).

⁷ C. de E. Sección Tercera, providencia de mayo 14 de 2014, CP. Dr. Enrique Gil Botero, radicación 25000-23-26-000-1999-02657-02 (33.586).

RADICACIÓN: 2019-00225-01
PROCESO: Ejecutivo
EJECUTANTE: María López Rengifo
EJECUTADO: Municipio de Santiago de Cali



6

derecho material o sustancia⁸ del que son titulares, como una manifestación del compromiso del Estado colombiano en la consecución de sus fines esenciales⁹.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-454 de 12 de junio de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra), se pronunció acerca de la finalidad del proceso ejecutivo, en los siguientes términos:

“4.1. El proceso ejecutivo en general tiene por finalidad obtener la plena satisfacción de una prestación u obligación a favor del demandante y a cargo del demandado; se trata, como lo han definido los doctriantes de una pretensión cierta pero insatisfecha, que se caracteriza porque no se agota sino con el pago total de la obligación”. [Subraya la Sala].

Posteriormente, la misma Corporación, mediante sentencia C-573 de 15 de julio de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), resaltó que:

“4.2. La existencia de esta clase de procesos tiene como soporte la garantía de la propiedad privada y de los demás derechos adquiridos conforme a las leyes civiles, y su finalidad consiste en satisfacer los derechos cuando los obligados no cumplen libremente con sus obligaciones. La ejecución pretende, entonces, la satisfacción del crédito reclamado por el ejecutante, es decir, hacer efectivo el derecho del acreedor frente al deudor, quien de manera libre ha contraído una obligación con aquél”. [Subraya la Sala].

Finalmente, en sentencia T-080 de 29 de enero de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), la Corte señaló:

“[...]. De acuerdo con lo anterior, la finalidad del proceso ejecutivo es la de procurar al titular del derecho subjetivo o del interés protegido, no el reconocimiento de este derecho o interés, el cual ha debido ventilarse en el proceso correspondiente, sino su satisfacción a través de la vía coactiva”. [Subraya la Sala]¹⁰.

En suma, la finalidad del proceso ejecutivo no es declarar un derecho dudoso, sino hacer efectivo el que ya está reconocido en una prueba pre constituida¹¹, y es por tal razón que el análisis de procedencia del mandamiento de pago se ha de limitar a verificar si las obligaciones son claras expresas y exigibles.

5.4. CASO CONCRETO:

De conformidad con el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, la Sala resolverá el recurso interpuesto por la parte ejecutante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

El juez de primera instancia, mediante el auto recurrido, dispuso negar el mandamiento de pago, por considerar que el título ejecutivo es ilegal, en la medida que el Consejo de

⁸ Constitución Política. “**Artículo 228.** La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será descentralizado y autónomo”. [Resalta la Sala].

⁹ Ibid., “**Artículo 2.** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. [Resalta la Sala].

¹⁰ C. de E. Sección Primera, auto de julio 12 de 2018, CP Dra. María Elizabeth García González, radicación 81-001-23-33-003-2017-00042-01.

¹¹ Procesos Ejecutivos, Declarativos y Cautelares, Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal N° 2., Marco Gerardo Monroy Cabra, Pág. 50, 1984.

RADICACIÓN: 2019-00225-01
PROCESO: Ejecutivo
EJECUTANTE: María López Rengifo
EJECUTADO: Municipio de Santiago de Cali



7

Estado, mediante sentencia de unificación, dispuso que los docentes no tienen derecho a la prima de servicios que le fue reconocida a la demandante a través de la providencia objeto de ejecución.

Por su parte, el apoderado de la demandante, en suma, señaló en el recurso de apelación impetrado que en este proceso no hay lugar a analizar un asunto ya resuelto, pues de tal modo se estaría vulnerando el principio a la seguridad jurídica, al efectuar nuevamente la revisión de una decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada.

Para esta Corporación resultan plausibles los argumentos expuestos por la parte apelante, como quiera que la finalidad del proceso ejecutivo no es efectuar el análisis sobre la procedencia del reconocimiento del derecho o interés protegido, el cual debió ventilarse en el proceso correspondiente.

Así entonces, tal como lo señaló el apoderado de la parte ejecutante, efectuar un nuevo análisis de la sentencia objeto de ejecución dentro del proceso ejecutivo resulta una conducta palmariamente transgresora de los principios de cosa juzgada¹² y de la seguridad jurídica¹³, en la medida que se abriría la puerta para que en el referido trámite se genere una nueva discusión respecto a una decisión ejecutoriada.

De igual forma, respecto a los argumentos expuestos por el juez *a quo* en relación con la aplicación de una decisión emitida por esta Corporación¹⁴, cabe anunciar que ella no guarda relación jurídica con el presente caso, puesto que el fundamento principal en dicha providencia para negar el mandamiento de pago fue el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia T-546 de 2014 que resolvió:

“...la Sala considera que las interpretaciones de los jueces administrativos vulneran el derecho al debido proceso de la UGPP, porque desconoce la jurisprudencia de esta Corporación señalada en el fallo T-359 de 2009, en el cual la Corte estableció de manera clara que con anterioridad a la Ley 100 de 1993, los pensionados con pensión gracia que contribuían con el 5% de su mesada pensional para la financiación de los servicios de salud, pasaron a cotizar el 12%, sin importar el tipo de pensión de que se trate, concluyendo que sin excepción alguna, es obligatoria la cotización a salud sobre la mesada pensional en un porcentaje del 12%, aporte que con posterioridad se destina a financiar el servicio médico asistencial del afiliado o pensionado, incurriendo sus providencias en un defecto sustantivo que da lugar a que en el presente caso proceda la acción de tutela...” (Subraya la Sala).

Situación que en nada se compara con el caso en estudio, pues es evidente que la providencia que se pretende ejecutar no puede ser declarada ilegal por el simple hecho

¹² “La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica” (Corte Constitucional, C-100 de 2019).

¹³ “La Corte Constitucional (SU 072 de 2018) ha explicado que la seguridad jurídica implica que “en la interpretación y aplicación del derecho es una condición necesaria de la realización de un orden justo y de la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos, dado que solo a partir del cumplimiento de esa garantía podrán identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite”.

¹⁴ Providencia de marzo 14 de 2019, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, MP Dr. Oscar Valero Nisimblat, proceso ejecutivo de Aura María de Ramírez frente a la UGPP.

RADICACIÓN: 2019-00225-01
PROCESO: Ejecutivo
EJECUTANTE: María López Rengifo
EJECUTADO: Municipio de Santiago de Cali



8

de haberse emitido una sentencia de unificación¹⁵, que por demás fue proferida con posterioridad al fallo de segunda instancia que reconoció el derecho a la actora.

En este punto, es pertinente recordar que frente al reconocimiento y pago de la prima de servicios a favor de los docentes, durante un tiempo considerable hubo disparidad de criterios y que fue a raíz de dicha discrepancia que el Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación de abril 14 de 2016¹⁶; providencia en la que se llevó a cabo el análisis de los argumentos que sustentaban las dos posturas y utilizó varias reglas y métodos de interpretación, conforme a la Constitución, para concluir que la Ley 91 de 1989 no crea ni reconoce a favor de los docentes oficiales la prima de servicios contemplada en el Decreto Ley 1042 de 1978, y que sólo a partir de 2014, estos servidores adquirieron el aludido derecho, en virtud del Decreto 1545 de 2013.

Además, la sentencia objeto de ejecución, como ya se indicó, fue proferida con anterioridad a que el Consejo de Estado unificara el criterio frente al reconocimiento de la prima de servicios a favor de los docentes. Luego, incluso, siendo permitido efectuar un análisis de legalidad del título ejecutivo, más allá de la verificación de que este sea claro, expreso y exigible, resultaría extremadamente gravoso negar el mandamiento de pago pretendido en el presente caso, bajo el argumento consistente en que éste es ilegal dando aplicación a un precedente jurisprudencial emitido con posterioridad a la ejecutoria de la providencia cuyo cumplimiento se pretende.

En consecuencia, tenemos que el título a ejecutar está contenido en la sentencia de segunda instancia de julio 9 de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual ordenó al Municipio de Santiago de Cali reconocer y pagar la prima de servicios a favor de la demandante, en su calidad de docente.

Por tanto, al efectuar el estudio de procedencia del mandamiento de pago, ha de limitarse a verificar si el título ejecutivo contenido en la aludida providencia es claro, expreso y exigible, más no efectuar un nuevo estudio de legalidad del fallo.

Así las cosas, la Sala dispondrá revocar la decisión de negar el mandamiento de pago tomada por el *a quo*, para que, en su lugar proceda él a efectuar el estudio pertinente respecto al cumplimiento de los requisitos de procedencia del mandamiento de pago.

VI. DECISIÓN

En consecuencia, esta Sala de Decisión

RESUELVE:

¹⁵ C. de E. Sección Segunda. CP: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Providencia de abril 14 de 2016. Radicación: 15001-33-33-010-2013-00134-01(3828-14) CE-SUJ2-001-16. Actor: Nubia Yomar Plazas Gómez. Demandado: Ministerio de Educación - Departamento de Boyacá. Referencia: Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2 No. 001/16 proferida en aplicación del artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, prima de servicios de docentes oficiales.

¹⁶ C. de E. Sección Segunda, sentencia de unificación de abril 14 de 2016, CP. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación No. CE-SUJ215001333301020130013401.

RADICACIÓN: 2019-00225-01
PROCESO: Ejecutivo
EJECUTANTE: María López Rengifo
EJECUTADO: Municipio de Santiago de Cali



PRIMERO. REVOCAR el auto interlocutorio nro. 573 del 16 de septiembre de 2019, proferido por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali, que dispuso negar el mandamiento de pago solicitado por la demandante Celia María López Rengifo contra el Municipio de Santiago de Cali.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE al juzgado de origen para que proceda a efectuar el análisis de procedencia del mandamiento de pago pertinente, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta No. _____).

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,

OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

OMAR EDGAR BORJA SOTO
EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS